



Consejo de  
Transparencia y  
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

## RESOLUCIÓN

N/REF: RT 0179/2017

FECHA: 06 de junio de 2017

**ASUNTO:** Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la Reclamación número RT/0179/2017 presentada por [REDACTED], el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

### I. ANTECEDENTES

1. Los hechos que originan la presente Reclamación pueden sistematizarse de la siguiente manera
  - El 17 de febrero de 2017 el ahora reclamante remitió un escrito al Ayuntamiento de Alcalá del Júcar -Albacete- en el que, tras poner de manifiesto que en dicho término municipal se ha establecido un restaurante ocupando unos terrenos que en parte son de su propiedad y los mismos, al parecer, se encuentran incluidos en una Zona de Especial Protección para las Aves dentro de la RED NATURA 2000, al amparo de las disposiciones del texto Refundido de la Ley del suelo y rehabilitación urbana, aprobado por Real Decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, así como de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, solicita *"que se me facilite información sobre las licencias concedidas tanto de las obras de adecuación llevadas a cabo, así como para el funcionamiento del local"*.

[ctbg@consejodetransparencia.es](mailto:ctbg@consejodetransparencia.es)



- Por la indicada Corporación local se traslada al interesado Resolución nº 62 de 22 de marzo de 2017, sobre su solicitud de información. En la misma se pone de manifiesto lo siguiente:
  - El petionario no justifica la condición de interesado, si bien puede derivarse su petición y entenderse ésta bajo el prisma del ejercicio de la acción pública urbanística, con la naturaleza, características y limitaciones de esta institución.
  - Las consideraciones que formula sobre el restaurante son de naturaleza civil, ajenas al ámbito administrativo, y deberán ser ventiladas y resueltas en el ámbito de la jurisdicción civil.
  - La petición formulada es repetitiva. Mediante resolución nº 149/16 de 6 de junio de 2014 se permitió al petionario la consulta de expediente de licencia de actividad del establecimiento, extensivo al de su ampliación. Más recientemente, por escrito de esta Alcaldía de 16 de marzo de 2016 se le amplió la información sobre la situación jurídica del inmueble.
  - Por tales actos, ya le consta al petionario que el local dispone de una licencia de instalación de actividad y apertura de café bar (13.12.2016) y de ampliación (04.08.2008)
  - Se remite al petionario la información ya facilitada sobre la cuestión planteada que consta en el cuerpo de la Resolución.
- Por escrito de 6 de abril de 2017, el ahora reclamante interpuso un recurso potestativo de reposición frente a la Resolución nº 62 de 22 de marzo reseñada en el párrafo anterior.
- A través de un oficio de 6 de mayo de 2017, por la Corporación local se traslada al ahora reclamante la Resolución de Alcaldía de 5 de mayo de 2017 con relación al recurso de reposición interpuesto. Este recurso potestativo de reposición se desestima al considerar el Ayuntamiento, a diferencia de lo que había planteado el actor, que la información solicitada se le había suministrado, remitiéndose en este sentido al texto de la anterior Resolución nº 62 de 22 de marzo de 2017.
- Disconforme con la anterior resolución, el ahora reclamante, a través de un escrito registrado en esta Institución el 5 de junio de 2017, plantea frente a la misma reclamación al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno –desde ahora, LTAIBG-.

## II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre,





por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.

2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto *“salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley”*. Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

*“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).*

*2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias”.*

En desarrollo de las anteriores previsiones normativas el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha suscribieron el pasado 30 de diciembre de 2015 un Convenio para la atribución de la competencia al citado Consejo para la resolución de las reclamaciones previstas en el citado artículo 24 LTAIBG respecto de las resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y su sector público, y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial y su sector público.

3. Precisadas las reglas generales sobre competencia orgánica para dictar esta resolución, la primera cuestión en la que debemos centrar nuestra atención se trata de un aspecto de índole procedimental.

En efecto, las reglas generales del procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a la información pública se abordan en los artículos 17 a 24 de la LTAIBG, especificándose, en materia de recursos, en el artículo 23.1 lo siguiente:

*La reclamación prevista en el artículo siguiente tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,*



*de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del  
Procedimiento Administrativo Común.*

Mientras que, por su parte, el artículo 24.3, en lo que atañe a la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dispone que,

*“La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”*

Las referencias contenidas en los citados preceptos de la LTAIBG a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, hay que entenderlos efectuados en la actualidad a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que ha derogado aquella norma.

Cabe advertir que el artículo 112.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, prevé la posibilidad de sustituir el recurso potestativo de reposición por “procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo”. De este modo, en suma, de los preceptos reseñados hasta ahora no cabe duda alguna que la Reclamación regulada en el artículo 24 de la LTAIBG que puede interponerse ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tienen la naturaleza de sustitutiva del recurso potestativo de reposición.

De acuerdo con ello, corresponde inadmitir la presente Reclamación en tanto y cuanto se ha planteado frente a la Resolución de un Recurso potestativo de reposición, posibilidad que está expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico. En este sentido, cabe recordar que el artículo 124.3 de la precitada Ley 39/2015, de 1 de octubre, prevé que “Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso”.

### III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede **INADMITIR** la Reclamación presentada por aplicación de lo previsto en el artículo 124.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.



De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En consecuencia, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA PRESIDENTA DEL  
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO  
Fdo: Esther Arizmendi Gutiérrez

